



Senado de la República

CONSTANCIA

La publicación de algunos videos que registran la irrupción de grupos de encapuchados en actos de las universidades Distrital, en Bogotá, y de Antioquia, en Medellín, ha dado lugar a las más variadas manifestaciones, que van desde los comentarios de numerosos columnistas en los medios de comunicación hasta un debate en el Senado de la República. Unos, muy pocos, han hecho análisis serios para darle explicaciones racionales al fenómeno; otros, simplemente se han dedicado a calificar a las universidades, en especial a las de carácter público, como nidos de vándalos y terroristas, a pedir mano dura y a tratar de obtener dividendos políticos descalificando al Rector de la Universidad Distrital y al Alcalde de Bogotá, Para algunos, el uso de capuchas intimida e impide el debate libre que debe adelantarse al interior de las universidades, en tanto que para otros es sólo una acción terrorista que hay que combatir a toda costa.

Ante esta situación queremos dejar clara constancia de que siempre que se trata de actos terroristas, los rechazamos y condenamos. Pero esta posición no significa que nos sumemos al coro de los nuevos inquisidores, porque nosotros estamos contra el terrorismo, pero también estamos contra la guerra.

Hace pocos días, el 11 de septiembre, se cumplieron 7 años del demencial ataque terrorista a las “torres gemelas”, en Nueva York, que le sirvió de pretexto al Presidente Bush para notificar al mundo de que “o están con nosotros o están con el terrorismo” y para poner en marcha su teoría de la “guerra preventiva”, que se tradujo en la invasión criminal de Irak y Afganistán y en gravísimas violaciones a la legalidad internacional y a los derechos humanos.

El gobierno colombiano ha adherido incondicionalmente a la política de la Administración norteamericana, hasta el punto de que el Presidente Bush ha

dicho que Uribe “hace todo lo que decimos y algo más”, lo que consideramos vergonzoso para nuestra dignidad nacional, y pretende que todos hagamos lo mismo. De ahí que si estamos contra el TLC, somos apátridas; si hacemos oposición, se nos tilda de terroristas o de “guerrilleros vestidos de civil”, y hasta la Corte Suprema de Justicia ha sido señalada de hacerle el juego al terrorismo. Incluso las palabras han sido tergiversadas en su verdadero significado, y “subversión”, ha sido convertida en sinónimo de “terrorismo”, cuando según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es “Trastornar, resolver, destruir, especialmente en lo moral”, y en ninguna parte dice que tales cosas deban hacerse apelando a medios terroristas o violentos.

En el caso de las universidades, hay que recordar que de acuerdo con un estudio hecho por la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, entre los años 2002 y 2007 se cometieron un promedio de cuatro violaciones a los derechos humanos de los estudiantes cada semana, entre ellos, el asesinato de 15 estudiantes, y que en estos hechos están comprometidos desde agentes del Estado hasta las bandas paramilitares, que continúan haciendo todo tipo de amenazas a pesar de que el gobierno asegura que ya no existen.

Las capuchas son apenas el resultado de la mentalidad clandestinista que se ha extendido por el país, la misma que está detrás de los cohechos de Yidis y Teodolindo, de las visitas de representantes de la mafia a la “casa de Nari”, por los sótanos y bajo las sombras de la noche, del ataque aleva a la soberanía de un país hermano y de otros hechos similares.

La solución, por consiguiente, no está en tender cortinas de humo, ni en azuzar la cacería de brujas, sino en construir una verdadera democracia en la que todos podamos caber.

En vista de que los recientes acontecimientos han sido utilizados como un medio de estigmatización de los estudiantes universitarios, queremos fijar nuestra posición en los siguientes términos:

1. La Universidad es por antonomasia una institución dedicada al debate y a la libre exposición de la ideas, a la crítica de la sociedad y, por lo mismo, es el escenario preciso para exponer posiciones políticas críticas sin salir del ámbito académico.
2. En nuestro país, la crítica situación social, política y económica, llama la atención del conjunto de instituciones públicas y es natural que los estudiantes universitarios debatan y planteen soluciones al respecto.

3. La universidad es también un escenario de debate político donde deben tener cabida las más diversas expresiones, en un ambiente de libre deliberación, alejado de cualquier expresión violenta y armada, incluida, por supuesto, la presencia de las fuerzas armadas del Estado.
4. No contribuye a la función social de la universidad, como escenario formador de ciudadanos para la democracia, la creciente estigmatización a la que vienen siendo sometidos los estudiantes, componente principal de estas instituciones.
5. La función de los poderes públicos es proteger las instituciones, su función social y, en especial, la vida y la integridad de los ciudadanos. Los señalamientos generan un ambiente hostil que impide el cumplimiento del papel que la universidad debe tener en la sociedad y pone en riesgo la vida e integridad de los estudiantes.
6. Llamamos al Congreso de la República y a la sociedad colombiana a rodear a la universidad, en particular a sus estudiantes, para que puedan cumplir con su papel alejados de cualquier señalamiento o provocación. Al mismo tiempo, ante la evidencia de la grave crisis humanitaria que atraviesan las universidades del país, invitamos a que se abra un debate público sobre las medidas a tomar y sobre el futuro de la educación superior en Colombia.

Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República